JUZGADO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN

Medellín, dieciocho de noviembre de dos mil veinte

Radicado 05001 31 03 015 2012 00804 00

En consideración al poder judicial allegado en mensaje de datos por la profesional del derecho **María Salome Paniagua Hernández**, en donde consta que el demandado **Gustavo de Jesús Correa** le otorga mandato judicial para representar sus intereses sobre el presente asunto (Cfr. Archivo 09 Cdno ppal – Exp Digital), el Despacho se abstiene de acceder a reconocer personería a la abogada en mención; toda vez que no se aprecia que efectivamente el mandato judicial adosado provenga de la cuenta electrónica del demandado Correa y en todo caso no basta la sola antefirma para colegir la manifestación de su voluntad en este sentido, máxime si se tiene en cuenta que consta en el sumario que sus intereses como parte venían siendo agenciados por otra togada (Cfr. Cdno Tribunal – Exp Digital). Por tanto, el Despacho no accede a lo solicitado.

De otro lado, se incorpora al sumario el pronunciamiento allegado por el secuestre **José Rodrigo Chingal Bisbicut**, en donde consta que para el día **8 de octubre de 2020** se procedió a realizar diligencia de entrega del automotor objeto de medidas previas, la cual no pudo concluir positivamente con su entrega, dado que, una vez más, los demandantes se oponen a recibir el vehículo en el estado en que se encuentra. Aunado al hecho que en esta ocasión el **Parqueadero Oscar Cano** manifiesta no permitir la entrega del rodante, debido a que el rodante fue entregado por empleados de Coopetransa y no por el secuestre o los demandantes; y adicionalmente por cuanto se adeudan más de veinte millones de pesos por concepto de estacionamiento del rodante. Es de resaltar además que, según consta en el acta de diligencia de entrega, para dicha calenda intervino también el señor Carlos Mario Yarce, mecánico de profesión, quien manifiesta que el vehículo le fue entregado por parte de un funcionario de Coopetransa y a la fecha le adeudan lo correspondiente a la prestación de sus servicios de reparaciones mecánicas.

A su vez, se adosa al plenario el pronunciamiento allegado por el gestor judicial de la parte actora en donde pone de presente fotografías que hacen constar el estado actual del vehículo objeto de medidas previas (Cfr. Archivo 10 – Cdno ppal – Exp Digital).

1.2. Resolución del asunto concreto. Las circunstancias que hoy por hoy orbitan en torno al presente evento convocan al Despacho, de manera impostergable, a adoptar una serie de determinaciones sobre los sujetos implicados en la entrega del vehículo de placas **TOP 152** objeto de medidas cautelares, dada las particularidades suscitadas hasta ahora.

A este propósito, conviene recordar que el secuestro es “...*el depósito de una cosa que se disputan dos o más individuos, en manos de otro que debe restituirla al que obtenga una decisión a su favor*” (Cfr. Art. 2273 Código Civil) y que para el caso que concita la atención de este Despacho resulta relevante destacar la importancia del *secuestro judicial*; el cual, en los términos del artículo 2276 *ídem* se constituye por decreto de juez, y no requiere otra

prueba distinta a esta circunstancia para comprobar su existencia. Ahora bien, conviene además indicar que, tratándose de bienes productivos de renta, el artículo 52 del Código General del Proceso establece que sobre los secuestres son aplicables “...*las atribuciones previstas para el mandatario en el Código Civil, sin perjuicio de las facultades y deberes a su cargo*”. De donde se sigue entonces que la medida de secuestro envuelve una serie de reglas sustanciales y adjetivas que no solo condicionan el actuar del secuestre, sino que además imponen deberes para quienes se benefician de su decreto, habida cuenta de la teleología que caracteriza a las medidas cautelares que alcanzan a limitar la disposición y goce de los bienes como atributos de la propiedad privada del afectado, so pretexto del interés jurídico perseguido por su solicitante.

Dicho esto, y descendiendo al asunto *sub examine*, es preciso recordar que este Juzgado, por diferentes proveídos, ha procurado dar cumplimiento a la orden impartida por el Superior (Cfr. Fl. 260 Archivo 01-; Fl. 281-282 *idem*; Fl. 325 y ss. *idem*; Fl.337; Fl. 346; Archivo 02; Archivo 06); no obstante, la parte demandante, por conducto de su apoderado judicial, pese a haber solicitado la entrega, a lo largo del trámite impartido ha obstaculizado dicha diligencia y se ha sustraído del deber de recibir el vehículo de su propiedad, so pretexto de las inconformidades que presentan con respecto del secuestro; aunado a que cuestiona el estado actual del bien, exigiendo que la entrega del automóvil se efectúe bajo la condición que se encuentre en el mismo estado en que fue entregado. Asimismo, ha cuestionado la relación de afiliación del vehículo con la entidad Coopetransa.

Es necesario advertir que en el transcurso del procedimiento el Despacho ha puesto de presente los diferentes informes del secuestre. Obsérvese que para el mes de noviembre de 2014 el secuestre expuso los daños en el motor del vehículo secuestrado (Cfr. Fls. 87 y ss. *idem*) y manifestó que “...*tanto la parte actora como su representante en este litigio me han afirmado categóricamente que ellos no ven óbice para que se compre un nuevo motor, de cuenta del dinero existente en el fondo*” (Cfr. Fl. 89 *idem*). Dicho informe fue puesto en conocimiento por el Juzgado competente para entonces (Cfr. Fl. 97 *idem*) y la parte demandante guardó silencio frente a lo señalado.

Seguidamente, se aprecia que por informe presentado por el secuestre el 18 de diciembre de 2015, el auxiliar de la justicia expuso que la entidad Coopetransa había conciliado con el propietario del parqueadero lo relativo a lo adeudado por estacionamiento del vehículo; y a su vez requería de las partes que se dispusieran a reparar el automotor (Cfr. Fls. 127 a 130 *idem*). El Despacho para entonces requirió del secuestre un informe detallado de sus cuentas (Cfr. Fls. 134 y 135); a lo cual el secuestre dio cumplimiento posteriormente (Cfr. Fls. 143 y ss.), recapitulando lo acontecido. El Despacho corrió traslado de esta rendición de cuentas y el apoderado del extremo activo, días después, sólo expuso que “...*como apoderado de los demandantes siempre hemos estado prestos a coadyuvar la labor del auxiliar de la justicia en todo lo que ha estado a sus atribuciones y facultades...*” (Cfr. Fl. 188),

Posteriormente, se avizora informe del secuestre obrante a folios 221 y siguientes del expediente digital, en donde indicó: “*Ahora bien de cara al cuestionamiento que se me hace, sobre lo que necesito de las partes en conflicto, es claro que solo ellas pueden disponer del capital*

necesario para cubrir la cuenta que a la fecha se adeuda por estacionamiento, la misma que ha sido certificada por el señor Oscar Alonso Cano Marín en la suma de \$4.560.000, ya que si bien Coopetransa hizo un acuerdo de pago con una mensualidad de \$240.000, tan convenio (sic) se cumplió hasta el día 9 de febrero de 2016.... Cubierto este primer ítem, deberán las partes prestar su concurso para asumir el pago de la reparación del bus, igualmente de lo adeudado al señor Cano por la reparación inicial y lo que es más importante desde mi óptica, permitir que el rodante pueda comenzar a laborar, sin que demandante o demandados lo impidan, destinando el producido y salvo mejor (sic) interpretación a cubrir todos los pasivos que al a fecha ya soporta el bus.... Allego registro fotográfico de cómo se encuentra a la fecha el bien a mi cargo” (Cfr. Fl. 221). Seguido a esto, el auxiliar de la justicia allegó al plenario “comunicado...en donde la empresa Coopetransa me informa que a decidido (sic) no renovar el contrato suscrito con los señores Oscar Antonio Gil Castaño y otros (sic)” (Cfr. Fl. 233). En dicha comunicación se informa la renuncia de la empresa al contrato de administración fundamentado en el incumplimiento contractual. Como destinatarios de esta carta obran los demandantes Gran Correa y Granda Herrera (Cfr. Fl. 234). Estos escritos fueron incorporados al sumario para agosto de 2017 (Cfr. Fl. 233) y en todo el interregno comprendido entre ese mes y la fecha de audiencia de instrucción y juzgamiento la parte demandante no se pronunció sobre estos aspectos.

Tiempo después, y luego de haber ordenado al secuestre proceder con la entrega y rendir las cuentas respectivas (Cfr. Fls. 260), el auxiliar de la justicia cumple con este requerimiento, y por auto del **12 de noviembre de 2019** se pone en conocimiento dicho informe y se adoptan otras determinaciones (Cfr. Fl. 281). La parte demandante permaneció silente frente a este informe, al punto que incluso el Despacho se dio a la tarea de requerir a su gestor judicial para que se pronunciara, a pesar de que fue por su solicitud que se instó al secuestre proceder con la entrega y rendir cuentas de su gestión (Cfr. Fl. 318). Sólo hasta comienzos del mes de marzo del año en curso el procurador judicial Becerra Cossio se pronunció sobre el *sub lite* (Cfr. Fls. 320 y ss.).

Como se puede apreciar de lo expuesto, resulta patente que la parte demandante no ha contribuido con eficacia a cumplir con sus deberes como sujeto procesal. Véase que cuando fue puesto en conocimiento del Despacho lo concerniente al contrato de administración de Coopetransa, los demandantes guardaron absoluta reserva frente a esta circunstancia. De manera que no resulta en nada admisible que, a más de que se trata de un asunto exógeno a este procedimiento, sólo después de solicitar la entrega del rodante se expongan las diferencias con esta compañía como soporte a la negativa de recibir el vehículo. De otro lado, nótese que la postura argumental de la parte actora en todo momento se caracterizó, para antes de ordenar la entrega, en guardar silencio en varias oportunidades frente a las cuentas del secuestre; y, se resalta de antemano, el Juzgado ha sido exhaustivo en señalarle la existencia de oportunidades procesales para los cuestionamientos que debe efectuar frente a lo actuado por el secuestre, no siendo la obstaculización a la diligencia de entrega una posibilidad procesal para efectos de cuestionar o debatir los resultados de la medida.

Igualmente se debe destacar que el estado actual del rodante se debe a su vez a la misma aquiescencia y pasividad desplegada por la parte actora. Recuérdesse que para el día **25 de julio de 2014** el secuestre procedió a entregar provisionalmente el vehículo al demandante **Luis Alfonso Granda Herrera** y a su apoderado **Edward Jeferson**

Becerra “...con el fin de abaratar costos en el proceso y en lo posible continuar su labor al interior de la cooperativa...” (Cfr. Fl. 71); y luego de las diferencias provocadas con la parte demandada por este proceder, el secuestre puso a disposición de la empresa **Coopetransa** el referido vehículo, según informe presentado (Cfr. Fls. 83 y 84 *ídem*). Se resalta que la parte demandante en todo instante estuvo informada sobre este particular, pues además el secuestre anotó en uno de sus primeros informes que estos le indicaban que *“Incluso tanto la parte actora como su representante en este litigio me han afirmado categóricamente que ellos no ven óbice para que se compre un nuevo motor, de cuenta del dinero existente en el fondo”*. Y aún a pesar de que en todo momento estos informes relativos al estado del bien fueron puestos en conocimiento por parte del secuestre a los sujetos procesales (Cfr. Fls. 83 y ss.) la parte demandante no se dispuso a insistir en alguna posibilidad de que el vehículo fuera reparado, cuando incluso desde una etapa liminar su interés en el secuestro atendía a la preservación del autobús, dado el reclamo consecuencial que buscaba obtener luego de la prosperidad de lo pretendido.

De allí que amerite indicar que, en lo que respecta a las diferentes solicitudes del secuestre en punto de la necesidad de que las partes se dispusieran a contribuir a la reparación del vehículo, es respecto a la misma parte demandante sobre quien ha de recaer las consecuencias de su propia omisión, pues estos debieron proveer al secuestre de todo lo necesario para que el vehículo estuviera en óptimas condiciones, dado que, incluso se había efectuado un compromiso para ello (Cfr. Art. 2184 C.C.).

Destáquese que el secuestre fue insistente en que *“...las partes no están dispuestas a prestar su concurso y la empresa afiliadora como tal esta (sic) desconociendo sus obligaciones”*, respecto de lo cual la parte actora permaneció indiferente ante la efectiva reparación del automotor luego del daño reportado por la empresa afiliadora ante el secuestre, aún a pesar de haber suscrito un acuerdo con éste y Coopetransa en donde autorizaba la compra de un motor nuevo en lugar de reparar el que el vehículo tenía para entonces *“... y colocar este vehículo lo más pronto a trabajar ya que el dueño del parqueadero donde esta vehículo necesita el espacio (sic)”*(Cfr. Fls. 116 *ídem*). Es preciso resaltar que, conforme lo indicó el secuestre en su informe de junio de 2015 (Cfr. Fls. 114 y ss. *ídem*), los compromisos consagrados en el acuerdo en cita fueron *“... obviados por los intervinientes, con el pretexto de que en tal reunión no se hizo presente el señor Gustavo Correa... Estudiadas las dos actas, es claro que a pesar de las diferentes reuniones y conversaciones, las partes no están dispuestas a prestar su concurso y la empresa afiliadora como tal esta (sic) desconociendo sus obligaciones”* (Cfr. Fl. 114 *ídem*). Es más, y aún en línea con el contexto dilucidado, resulta llamativo incluso que el vocero judicial de la parte demandante afirmara en representación de sus mandantes haber estado *“... Prestos a coadyuvar la labor del auxiliar de la justicia en todo lo que ha estado a sus atribuciones y facultades...”* (Cfr. Fl. 188 Cdo ppal Archivo 01), cuando de todo lo actuado emerge un entendimiento contrario, pues a lo largo del procedimiento no se aprecia que los demandantes hubiesen actuado con sujeción a esta afirmación.

Todas estas circunstancias conducen a colegir que en realidad la parte demandante no desplegó el debido interés por resguardar el bien objeto de litigio, pues según consta en los informes del secuestre, “... a este auxiliar de la justicia tanto el demandante como el demandado en diversas reuniones celebradas le han ofrecido asumir el costo de la reparación del automotor a cambio de que yo les descuenta de la administración y

producido lo que ellos inviertan, pero finalmente ninguno ha cumplido con la palabra (sic)” (Cfr. Fl. 179 *ídem*), afirmación que la parte actora no desvirtuó a la hora de tener la oportunidad procesal pertinente para oponerse al informe rendido (Cfr. Auto del 24 de octubre de 2016 – Corre traslado de las cuentas – Fl. 181 *ídem*) y que por demás se advierte acreditada, pues brilla por su ausencia alguna actuación de la parte actora tendiente a proveer los gastos de reparación que su vehículo demandaba que conduzca a concluir algo distinto.

Huelga anotar además que, desde la misma diligencia de secuestro el vehículo ya se caracterizaba por tener “...TODA LA CARROCERIA DEL VEHICUÑO (sic) ES REPINTADA, E IGUALMENTE SUS LOGOS, EN EL MOMENTO PRESETA (sic) RAYONES PROFUNDOS Y SUMIDOS VARIOS, EL PISO INTERNO DE LA CARROCERIA SE ENCUENTRA ROTO Y EN MAL ESTADO, EL PARABRISAS DELANTERO ESTA RAYADO, SE ENCUENTRA EN GENERAL EN REGULAR ESTADO DE MANTENIMIENOT Y COSERVACION (sic)...” (Cfr. Fl. 60 *ídem*), por lo que no resulta un hecho novedoso que el vehículo presente desmejora en su carrocería, habida consideración a las condiciones en las que se encontraba a la hora de perfeccionar la medida cautelar; y en todo caso, a lo largo del procedimiento se evidencia que los demandantes estaban al tanto de su estado y no se dispusieron a evitar la prolongación de su deterioro. A lo dicho debe agregarse que, incluso, el mismo secuestre expuso sobre el estado del motor del vehículo secuestrado que: “*Es de significar que este motor ya ha soportado dos reparaciones, una realizada por el demandante y otra por el demandado, lo que a la fecha no permite que sobre el mismo bloque se realice una tercera ya que quedaría al 75% como última vida*”(Cfr. Fl. 89 *supra*), y sobre este aspecto la parte demandante no manifestó contrariedad alguna.

Aunado a lo expuesto, es necesario señalar que, aun al margen de las vicisitudes presentadas con la parte demandada y el secuestre, lo cierto es que la parte actora fue la interesada en la medida de secuestro del rodante, especialmente porque buscaba “... **proteger el bien de eventuales daños que le sean irrogados, amén que está en posesión de los demandados y es un vehículo de servicio público intermunicipal**” (Cfr. Fls. 26-27 Archivo 01), y en ese orden de ideas, al ser la parte beneficiada por el decreto de la medida, tenía el deber de velar por el estado del vehículo cumpliendo con las mejoras, expensas y reparaciones que el bien demandaba, al ser este susceptible al deterioro por el paso del tiempo; máxime cuando a lo largo del procedimiento la condición de propietarios inscritos del vehículo nunca mutó (Cfr. Fl. 4 *ídem*). De tal suerte que no resulta de recibo que bajo las actuales condiciones del vehículo se oponga la parte actora a recibirlo por su estado, pues en últimas esta circunstancia se debe en gran medida a su propio desinterés

En línea con lo expuesto, conviene anotar que, a todas estas, en el evento de considerarse que sobre el vehículo se ha irrogado un deterioro, lo cierto es que sus propietarios, aquí demandantes, tienen una eventual responsabilidad sobre este aspecto, pues a lo largo del trámite les fue puesto en conocimiento las diferentes circunstancias acontecidas sobre el vehículo y, a pesar de ello, no procuraron impedir las afectaciones que actualmente se reflejan sobre el rodante. Véase que, por el contrario, la parte actora desde su postura procesal ha obstruido las diferentes medidas adoptadas por el

Despacho con miras a permitir la entrega del vehículo; conducta que, observada desde el punto de vista de la responsabilidad civil, contraviene abiertamente el deber de todo sujeto de *mitigar los daños propios*, instituto sustancial concerniente a “*la carga que tiene el acreedor cumplido o la víctima del daño [...] de adoptar todas las medidas razonables enderezadas a prevenir, moderar o limitar los perjuicios resultantes del incumplimiento [...]*”¹, pues en este caso la parte actora, más que propender por resolver lo acontecido, antes está agravando las circunstancias del caso, impidiendo la materialización de la orden dictada por el Tribunal Superior de Medellín, y por tanto, lo que se está perpetuando es una prolongación de una desmejora sobre el rodante de su propiedad por cuenta del paso del tiempo.

Luego, importa destacar además que los demandantes, y concretamente su vocero judicial, han entorpecido la entrega del vehículo bajo el argumento de estar ante la ausencia de una rendición de cuentas detallada por parte del auxiliar de la justicia. Cuestión que no es de recibo por cuanto se han presentado distintos informes sin cuestionamiento alguno; y por cuanto insistentemente esta Judicatura ha resuelto en diferentes oportunidades indicando que para cuestionar las presuntas irregularidades en las gestiones del secuestro existe una serie de alternativas procesales, tal y como es la promoción de una objeción a las cuentas definitivas del secuestro, en donde se decida cada uno de los pormenores enrostrados por el objetante, lo cual, por la misma conducta de la parte no ha logrado materializarse.

Sin embargo, y esto es lo que reprocha el Despacho en esta ocasión, el extremo activo a pesar de contar con las diferentes sendas procesales ilustradas por el Despacho, asume una actitud díscola y renuente ante lo acontecido, pues a más de que no se vale de las diferentes herramientas procesales para hacer valer efectivamente sus inconformidades frente a los autos emitidos—réplica formal a través de recursos u objeción a las cuentas presentadas—, no contribuye a finiquitar lo concerniente a la entrega del vehículo de su propiedad. Es más, se itera, no cuestiona oportunamente las actuaciones del Juzgado, sino que permite su ejecutoria, para luego obstaculizar la entrega del bien. De allí que, al no estar justificada la postura procesal asumida hasta ahora por los demandantes y su mandatario judicial, resulte necesario indicar que en lo sucesivo no podrán oponerse a la entrega del vehículo secuestrado. Por tanto, es del caso exhortar a la parte actora y a su apoderado judicial asumir una conducta acorde a sus deberes legales (Cfr. Arts. 78 y ss. C.G.P).

En razón a los diferentes motivos expuestos con precedencia, y con ocasión al entorpecimiento presentado respecto a las diligencias programadas, es que el Despacho avista la necesidad de poner en conocimiento la conducta procesal del mandatario judicial de la parte actora ante la autoridad disciplinaria correspondiente. Por lo tanto, se ordena oficiar a la **Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia-Chocó**, a efectos de que se investigue si la conducta procesal asumida por el abogado **Edward Jefferson Becerra Cossio** a lo largo de este trámite declarativo,

¹ Álvaro Andrés González Briceño, El daño o perjuicio, en Derecho de las Obligaciones, T II, V. I, 146 (Marcela Castro, coord., Universidad de Los Andes, Bogotá, 2010). “El deber de mitigación opera como un mecanismo de desincentivo a las actitudes pasivas o negligentes del acreedor frente al incumplimiento, y lo conmina a impedir la agravación del daño. (Farnsworth, 2004, p. 779; Soler, 1998, p. 622)” Cita extraída de artículo académico: Barone, J. (2018). El deber de mitigar los daños por incumplimiento contractual. Revista Verba Iuris, 13(39), pp. 81-106.

especialmente en lo que tiene que ver con el desarrollo de la medida cautelar de secuestro decretada sobre el vehículo de placas **TOP 152** de propiedad de sus prohijados y la entrega del mismo, constituye una eventual falta disciplinaria.

Precisado lo anterior, y previo a considerar a cabalidad una nueva orden de programación de diligencia de entrega, es preciso resolver lo concerniente a la oposición que en esta nueva oportunidad presenta ahora el propietario del **Almacén de Repuestos y Servicios de Parqueadero Oscar Cano**.

En la diligencia de entrega programada y desarrollada por el secuestro para el día **8 de octubre de 2020**, el propietario del parqueadero en cita manifestó “...**no entregar el vehículo a los señores Granda hasta tanto no se cancele el valor de parqueadero...**” (Cfr. Fl. 13 Archivo 08). Ante esto, advierte el Despacho que el referido establecimiento está ejerciendo un **derecho de retención** en los términos del artículo 1177 del Código de Comercio, el cual autoriza al depositario “...*retener la cosa depositada para garantizar el pago de las sumas líquidas que le deba el depositante, relacionadas directamente con el depósito*”, por lo cual, esta Agencia Judicial no puede desplazar esta prerrogativa legal que le asiste al propietario del parqueadero en el cual se encuentra el vehículo objeto de medidas, y por tanto, no resulta procedente en esta ocasión insistir en la entrega del rodante desconociendo el mandato contenido en el Art. 1177 del C. de Co.

Sobre este particular la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia² ha reconocido que “...*el servicio de estacionamiento es un contrato de depósito, en virtud del cual, «se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y de restituirla en especie» (artículo 2236 del Código Civil) y se perfecciona con la entrega de la cosa. **En materia, mercantil esa clase de acuerdo es remunerado (artículo 1170 del Código de Comercio) y el depositario, esto es, la persona encargada del cuidado de la cosa, tiene derecho a retenerla con el fin de garantizar «las sumas líquidas que le deba el depositante, relacionadas directamente con el depósito» (artículo 1177, ejusdem).***”

Al tiempo que, en la misma sentencia en cita, la Corte fijó a un asunto con connotaciones semejantes al *sub examine* que: “...**no se puede acceder a la pretensión de entrega del vehículo, toda vez que el estacionamiento Montacargas Grúas y Parqueaderos está haciendo uso legítimo del derecho de retención sobre el bien depositado conforme lo prevé el artículo 1177 del Estatuto Mercantil anteriormente citado**”³

De allí que sea ineludible el reconocimiento del derecho de retención efectuado por el propietario del parqueadero en el cual se ubica el rodante secuestrado, hasta tanto no se efectúe el pago de lo adeudado por concepto de estacionamiento del vehículo.

Luego, atendiendo a lo consignado con precedencia, es menester señalar la parte encargada de asumir los costos derivados del estacionamiento que hasta ahora se han causado ante el **Almacén de Repuestos y Servicios de Parqueadero Oscar Cano**.

² Cfr. Sentencia STC 15348 de 2019. M.P. Álvaro Fernando García Restrepo

³ *idem*

A este fin, téngase en cuenta que “...*los gastos ocasionados con la inmovilización de un vehículo (grúa, parqueadero, etc.) como consecuencia de la práctica de medidas cautelares, tienen la categoría de necesarios, pues con la materialización del embargo y aprehensión de la cosa, el demandante o ejecutante verá realizado el derecho pretendido con el litigio. Entonces, los conceptos aludidos deben liquidarse dentro de las costas del proceso y su pago estará a cargo de la parte vencida, conforme lo previsto en el numeral 1º del canon 365 de la nueva ley de enjuiciamiento civil.*”⁴. De allí que, al ser los demandantes los inicialmente interesados en el decreto del secuestro para resguardar la integridad del vehículo de su propiedad, aunado al hecho de que sus pretensiones salieron adelante, resulte preciso indicar que, al ser el pago del parqueadero un **gasto necesario**⁵ para resguardar materialmente el bien objeto de medidas, **es responsabilidad de la parte vencida (en este caso la parte demandada) asumir los gastos de parqueadero hasta ahora ocasionados por cuenta del decreto de la medida cautelar de secuestro del bien objeto de litigio.**

Nótese, como lo ha indicado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que “... *el artículo 361 del Código General del Proceso establece que las costas están «integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso»; son expensas, verbigracia, el arancel judicial «relacionado con copias, desgloses, certificaciones, autenticaciones, notificaciones y similares» (art. 362, ibídem) y los honorarios de los auxiliares de la justicia; de otra parte, las costas también comprende, en general, «los gastos que es preciso hacer para obtener la declaración o ejecución judicial de un derecho»⁶, o sea que están excluidos los costos que «no son consecuencia directa del proceso propiamente dicho»⁷, por tal razón, el numeral 3º del canon 366 ejusdem manda que para la liquidación de tal ítem, se deberá incluir «el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley»⁸.*

Por tanto, en línea con los parámetros trasuntos, se concluye que es responsabilidad de la parte demandada asumir los gastos de parqueadero que actualmente adeuda el rodante ante el **Almacén de Repuestos y Servicios de Parqueadero Oscar Cano**. Sin embargo, dadas las connotaciones del caso, y particularmente con el derecho de retención esgrimido, se destaca que nada obsta que la parte interesada en la entrega del vehículo, esto es, la parte actora, asuma los gastos de parqueadero atrás indicados, ello sin perjuicio de que posteriormente, previo a una debida acreditación al interior de este procedimiento, se reconozca a través de decisión con mérito ejecutivo los pagos efectuados a título de costas procesales a su favor.

Finalmente, el Despacho avizora la necesidad de examinar que las funciones desempeñadas por el secuestro se hayan efectuado a cabalidad y por lo tanto se procederá a adelantar el respectivo incidente.

⁴ Cfr. Sentencia STC 15348 de 2019. M.P. Álvaro Fernando García Restrepo

⁵ Para la doctrina, son «gastos» útiles o necesarios «cuando sin ellos la actuación de la ley en favor de la parte favorecida no hubiere sido posible, de modo que al no hacerse ellos, el proceso, incidente o recurso no se hubiera desenvuelto favorablemente para el vencedor» Hernando Morales Molina. (1983). Curso de Derecho Procesal Civil. Bogotá D.C.: ABC-Bogotá. Cita extraída de la decisión citada supra.

⁶ Hernando Morales Molina. (1983). Curso de Derecho Procesal Civil. Bogotá D.C.: ABC-Bogotá.

⁷ Ibídem.

⁸ Cfr. Sentencia STC 15348 de 2019. M.P. Álvaro Fernando García Restrepo

Así las cosas, teniendo en cuenta las particularidades que componen el contexto suscitado por cuenta de la práctica de la medida de secuestro sobre el bien objeto de litigio, advierte el Despacho la necesidad de dar apertura a un trámite incidental de sanción sobre el auxiliar de la justicia **José Rodrigo Chingal Bisbicut**, a efectos de resguardar su derecho de contradicción y defensa en cuanto a comprobar si, en los términos del contenido final del numeral 7° del artículo 50 del C.G.P., su gestión como secuestre en este procedimiento reviste algún grado de negligencia que amerite oficiar a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura (*Cfr.* Art. 50 C.G.P.).

Por Secretaría, remítase el correspondiente oficio al secuestre en mención, advirtiéndole que, a tono con lo previsto en el artículo 129 del C.G.P., cuenta con el término de **tres (3) días** para que acompañe las pruebas y documentos que tengan en su poder y que pretenda hacer valer

Sin perjuicio de lo antes indicado, se requiere al secuestre **José Rodrigo Chingal Bisbicut**, a efectos de que proceda a **rendir cuentas detalladas de su gestión en el término de diez (10) días**, contados una vez obtenga conocimiento del contenido de esta decisión. Esto, en razón a la imposibilidad de proseguir con la orden de entrega del vehículo secuestrado, habida consideración al derecho de retención reconocido a través de este proveído.

En consideración de lo expuesto con precedencia, el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Medellín,

RESUELVE:

Primero. No se reconoce personería para actuar a la profesional del derecho **María Salome Paniagua Hernández**, en atención a las razones consignadas al inicio de este proveído.

Segundo. Abstenerse de proseguir con la orden de entrega, en atención a las razones consignadas en este proveído.

Tercero. Exhortar a la parte actora y a su apoderado judicial asumir una conducta acorde a sus deberes legales (*Cfr.* Arts. 78 y ss. C.G.P.).

Cuarto. Oficiar a la **Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia-Chocó**, con copia digital de todo el expediente electrónico que compone el presente procedimiento, a efectos de que se investigue si la conducta procesal asumida por el abogado **Edward Jeferson Becerra Cossio** a lo largo de este trámite declarativo, especialmente en lo que tiene que ver con el desarrollo de la medida cautelar de secuestro decretada sobre el vehículo de placas **TOP 152** de propiedad de sus prohijados y la entrega del mismo, constituye una falta disciplinaria.

Quinto. Oficiar al propietario del **Almacén de Repuestos y Servicios de Parqueadero Oscar Cano**, a efectos de que obtenga conocimiento de los apartes de la

presente decisión que conciernen al derecho de retención ejercido en la diligencia de entrega realizada el pasado **8 de octubre del corriente**.

Sexto. Dar apertura de incidente de sanción frente al secuestre **José Rodrigo Chingal Bisbicut**, en los términos de los artículos 50 núm. 7 y 127 del Código General del Proceso, conforme lo expuesto en la parte motiva de este auto. Por Secretaría, remítase el correspondiente oficio al secuestre en mención, advirtiéndole que, a tono con lo previsto en el artículo 129 del C.G.P., cuenta con el término de **tres (3) días** para que acompañe las pruebas y documentos que tengan en su poder y que pretenda hacer valer.

A su vez, **se requiere** al referido auxiliar de la justicia a efectos de que proceda a **rendir cuentas detalladas de su gestión en el término de diez (10) días**, contados una vez obtenga conocimiento del contenido de esta decisión.

**NOTIFÍQUESE
ÁLVARO ORDOÑEZ GUZMÁN
JUEZ**

2

Firmado Por:

**ALVARO EDUARDO ORDOÑEZ GUZMAN
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 019 CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **d464766fdb3296704abfec89ab4718b1fe0cfdba152571fa6ce17f9041275f8c**
Documento generado en 18/11/2020 10:41:06 a.m.

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**